



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Demandante: AURA ROSA MURIEL DE NARANJO  
Demandado: ACP COLPENSIONES  
Litis por pasiva: MARTHA CECILIA ARDILA ÁLVAREZ y WILLIAM JOSÉ NARANJO  
ARDILA  
Radicado: 05001 31 05 018 2014 01391 01  
Sentencia: S-285

## **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de enero de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

AURA ROSA MURIEL DE NARANJO demandó a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge supérstite, por el fallecimiento de su esposo JOSÉ WILLIAM NARANJO RÍOS, a partir del

13 de enero de 1999 junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que el señor JOSÉ WILLIAM NARANJO RIOS - con quien contrajo matrimonio por el rito católico el 3 de agosto de 1963 - falleció el 13 de enero de 1999. Que su esposo estuvo afiliado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES dejando acreditadas 384.30 semanas de cotización; que presentó ante COLPENSIONES solicitud de pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante resolución GNR 280186 del 8 de agosto de 2014, por cuanto la prestación ya había sido reconocida a favor de la Sra. MARTHA ARDILA ÁLVAREZ y WILLIAM JOSÉ NARANJO ARDILA en calidad de beneficiarios. Sostiene que compartieron techo y lecho hasta la fecha de la muerte y de dicha unión nacieron 3 hijos, LORENA, JUAN CARLOS y GLORIA PATRICIA NARANJO MURIEL. Afirma que su cónyuge tuvo una vida lujuriosa y desbordada y mantuvo relaciones extramatrimoniales, especialmente con la señora MARTHA ARDILA ÁLVAREZ, con quien tuvo un hijo, llamado WILLIAM JOSÉ NARANJO ARDILA.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de fallecimiento del causante, el matrimonio con la demandante y lo relacionado con el reconocimiento de la prestación a la señora MARTHA ARDILA ÁLVAREZ y a su hijo WILLIAM JOSÉ NARANJO ARDILA. Señala que no le consta la convivencia con el causante, lo que deberá ser probado dentro del proceso. Se opuso a las pretensiones de la demanda y como excepciones propuso falta de integración del contradictorio, inexistencia de la obligación para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, improcedencia de los intereses de mora, improcedencia

de la indexación de las condenas, imposibilidad de condena en costas, prescripción, compensación y buena fe.

### **LITISCONSORCIO NECESARIO POR PASIVA**

Ante el reconocimiento previo de la pensión a la señora MARTHA CECILIA ARDILA ÁLVAREZ y a WILLIAM JOSÉ NARANJO ARDILA en su calidad de compañera permanente e hijo del causante respectivamente, mediante auto del 4 de diciembre de 2014 se dispuso su vinculación al proceso en calidad de litisconsortes necesarios por pasiva.

Y como no se pudo lograr su comparecencia al proceso, la representación ha estado a cargo de curador ad litem, quien se ocupó de contestar la demanda aceptando únicamente la fecha de fallecimiento del causante, ya que frente a lo demás dijo que no le consta y que corresponde ser demostrado en el proceso. Respecto a las pretensiones, indica que se atiene a lo que se pruebe y al criterio del Juez al momento de dictar sentencia, al paso que no propone excepción alguna.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 11 de enero de 2022, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín DELARÓ que a la demandante AURA ROSA MURIEL DE NARANJO le asiste derecho al reconocimiento y pago del 50% de la pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento del señor JOSÉ WILLIAM NARANJO RÍOS. En consecuencia, CONDENÓ a la señora MARTHA CECILIA ARDILA ÁLVAREZ a pagar la suma de \$53'602.910 por concepto de 50% de las mesadas pensionales causadas entre el 3 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2021 y a COLPENSIONES a continuar pagando ese mismo porcentaje de la prestación a partir del 1 de enero de 2022, en razón de 14 mesadas al año y un valor equivalente a un SMLMV.

Niega la pretensión de intereses de mora, DECLARA probada la excepción de prescripción de manera parcial y CONDENA en costas a cargo de COLPENSIONES en la suma de \$2'680.910 y a cargo de la señora MARTHA CECILIA ARDILA ÁLVAREZ en 1 smlmv, en ambos casos a favor de la demandante.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la **demandante** presentó recurso de apelación mediante el cual solicita que el pago del retroactivo pensional sea ordenado a cargo de COLPENSIONES; que el porcentaje otorgado sea superior en proporción al tiempo de convivencia; y que se condene al pago de intereses moratorios o en su defecto la indexación. Sostiene que COLPENSIONES no probó haber realizado de manera diligente ninguna investigación administrativa frente a los derechos reclamados por la señora MARTHA ARDILA; tampoco en la solicitud del reconocimiento pensional que realizó la demandante el 3 de abril de 2014. Desde el momento que COLPENSIONES tuvo conocimiento de la reclamación de la demandante debió iniciar un proceso investigativo y posteriormente, de hallar alguna falsedad, presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicitándole a la señora MARTHA ARDILA reintegrar los dineros que le fueron pagados.

En este caso no habría un perjuicio hacia COLPENSIONES ni a la sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que dicha entidad en este caso tendría una vía para recurrir, la cual es la administrativa, para que la señora MARTHA ARDILA haga la respectiva devolución de los dineros que le fueron pagados de más. La demandante desde el año 2014 realizó la solicitud de reconocimiento pensional, por lo que tiene derecho a que se le otorgue ese retroactivo pensional desde el 3 de abril de 2011 a cargo de COLPENSIONES.

También solicita se analice el tema de reconocimiento de intereses moratorios teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que indica su carácter resarcitorio y no sancionatorio o en su lugar se ordene la indexación de las sumas reconocidas.

El apoderado de **COLPENSIONES** cuestiona el hecho de haberse considerado a la señora AURA ROSA beneficiaria de la sustitución pensional reclamada. No está de acuerdo con la valoración probatoria realizada al habersele dado credibilidad a que continuó la ayuda mutua y mantuvo una relación con el causante, pero de la prueba testimonial aportada en el proceso, quedó en evidencia que desde 1984 cesó por completo la relación de convivencia, ayuda mutua, apoyo efectivo y asistencia solidaria tal y como se confesó en el interrogatorio de parte. Se justificó que la separación entre la demandante y el causante se dio por actos de violencia, lo que es contradictorio en la medida que si bien la testigo CELINA manifestó que conoció que existió violencia durante los años en que convivieron la señora MARTHA y el causante, no puede darse por probado por ese mero testimonio, ya que según la declaración rendida por la demandante ante preguntas específicas de cuál era y cómo era su relación con el señor JOSE WILLIAM ARANGO, ella respondió que bien y ante pregunta de la relación del señor JOSÉ WILLIAM con los hijos ella respondió que su relación era muy buena, por lo que considera que es contradictorio lo que responde la testigo, de manera que no puede concluirse que su separación se dio por actos de violencia.

Los testimonios rendidos por CELINA GIRALDO y MARÍA LICINIA, son de oídas durante los últimos años, ya que ambas personas residen fuera del país, por lo que no son idóneas para acreditar que la convivencia de la demandante y el causante hubiera permanecido en el tiempo y no pueden asegurar tampoco que durante los últimos dos años de vida del causante se hubiera mantenido esa convivencia. Es contradictorio darles credibilidad a esos actos de violencia descritos por la testigo CELINA GIRALDO, cuando la demandante afirma que

continuaron los actos de apoyo económico, acompañamiento espiritual y asistencia solidaria; no es congruente pensar que, si se separaron por actos de violencia, aquellas acciones continuaron en el tiempo.

Finalmente, la **curadora ad litem**, quien actúa en representación de los litisconsortes por pasiva, se declaró inconforme con la decisión debido a que la señora MARTHA CECILIA es una persona de escasos recursos y no tendría como sufragar la condena que se le ha impuesto. Considera que tampoco es la llamada a pagar la condena debido a que se trata de una obligación que le corresponde a COLPENSIONES. Insiste que no cuenta con la capacidad para hacer el pago y de ser descontado del 50% de su mesada pensional le afectaría y violaría su derecho a la pensión que le corresponde.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

Dentro de la oportunidad legal, la entidad demandada presentó alegatos de conclusión mediante los cuales solicita se revoque la sentencia de primera instancia al no haberse demostrado la convivencia que exige la ley.

La parte demandante solicita se modifique la sentencia en lo siguiente, i) en cuanto al porcentaje o proporción en que se le reconoció la prestación teniendo en cuenta el tiempo de convivencia y ii) en cuanto a que el retroactivo pensional debe estar a cargo de COLPENSIONES. De otro lado, solicita se revoque la sentencia en cuanto absolvió de los intereses moratorios, para en su lugar acceder a dicha pretensión.

### **CONSIDERACIONES:**

Atendiendo a los principios de consonancia y congruencia que rigen en el procedimiento laboral, los temas de los que se debe ocupar la Sala

no puede ser extraños a lo que se ha planteado en el recurso de apelación por los apoderados de las partes y al desarrollo probatorio que ha tenido el proceso según la fijación del litigio determinada por el Juzgado de primera instancia.

En esas condiciones, el derecho como tal a la pensión de sobrevivientes que viene disfrutando la señora MARTHA CECILIA ARDILA ÁLVAREZ, es una situación que no está discutiendo COLPENSIONES como entidad responsable del pago de la prestación.

Aclarado lo anterior, se precisa que el primer problema jurídico que la Sala debe resolver, se orienta a definir si la demandante AURA ROSA MURIEL DE NARANJO tiene la calidad de beneficiaria de la prestación por razón del fallecimiento de quien fuera su cónyuge, el señor JOSÉ WILLIAM NARANJO RÍOS, y solo en caso afirmativo se abordarán los demás temas tales como: i) establecer el porcentaje de la prestación que le correspondería a cada beneficiaria; ii) determinar a cargo de quién estaría el pago del retroactivo pensional; y iii) definir si hay lugar al pago de intereses moratorios o a la indexación de las condenas.

Es de reiterar, que la demandante MURIEL DE NARANJO aspira con la presente acción judicial, se disponga el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en 50% por la muerte del cónyuge, hecho ocurrido el día 13 de enero de 1999, pues considera que reúne el requisito de la convivencia con el causante en los términos establecidos en el artículo 47 de la ley 100 de 1993.

Previo a ello, conviene dejar en claro que los siguientes aspectos fácticos no han sido objeto de discusión dentro del proceso:

i) La pareja contrajo matrimonio por el rito católico el día 3 de agosto de 1963;

ii) El señor NARANJO RIOS falleció por causas de origen común el 13 de enero de 1999;

iii) La pensión de sobrevivientes fue reconocida a la señora MARTHA CECILIA ARDILA ÁLVAREZ y a su hijo WILLIAM JOSÉ NARANJO ARDILA en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente según Resolución N° 4547 de enero de 1999 del entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, luego de considerar acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

iv) WILLIAM JOSÉ NARANJO ARDILA, hijo extramatrimonial del causante, nació el 12 de octubre de 1989.

v) La demandante se presentó ante COLPENSIONES a reclamar la pensión de sobrevivientes, el 3 de abril de 2014.

Ahora bien. El reconocimiento por parte del ISS de la prestación en el año 1999, en favor tanto a la compañera permanente como de su hijo, es suficiente para considerar que efectivamente la pensión de sobrevivientes que se debate en el proceso debe ser reconocida a quien acredite los requisitos legales, pues la causación como tal no es objeto de controversia, en tanto fue reconocida gracias a que el afiliado reunía el requisito de la densidad de semanas que en ese entonces exigía la ley.

En este orden, la fecha de la muerte del causante es la que determina, por regla general, la normativa aplicable a efectos del análisis de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia. Así la tiene definido pacífica y reiterativamente la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tal y como puede consultarse en las siguientes sentencias: 2 de marzo de 2007, radicado 27.593; 29 de noviembre de 2011, radicado 40.055; 21 de marzo de 2012, radicado 43.572; la del 30 de enero de 2013, radicado 41024; la SL 13644 del 23 de agosto de

2017, radicado 53.043; SL 4960 del 7 de noviembre de 2018, rad. 65836; SL 4559 del 23 de octubre de 2019, rad. 74456; y más recientemente la SL 414 del 27 de enero de 2021, radicado 69788.

Atendiendo al fallecimiento del señor NARANJO RÍOS el 13 de enero de 1999, la norma aplicable es la ley 100 de 1993 en su texto original, cuyo artículo 47 dispuso: *“En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente superviviente, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte **y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte...**”* (Destaca la Sala)

Con relación a lo anterior, debe decirse que, en principio, tal hipótesis normativa presupone la existencia, como beneficiario único, bien de la cónyuge o el cónyuge, o bien de la compañera o compañero permanente, según se deduce de la “o” disyuntiva del texto del artículo, para lo cual se les otorga un trato igualitario – cónyuge o compañera (o) - atendiendo a la noción natural que el constituyente de 1991 confirió al concepto de *“familia”*, en los términos del artículo 42 de la Carta en cuanto la concibe como el núcleo fundamental de la sociedad, constituida por vínculos que pueden ser no solo jurídicos sino también naturales, originada en la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, o por la voluntad responsable de conformarla.

Ocorre que, si la norma que se requiere aplicar es el texto original del artículo 47 de la ley 100 de 1993, ello supone la imposibilidad de que se reconozcan los derechos a cónyuge y compañera, sino a una o a otra, tema respecto del cual se ha ocupado la jurisprudencia laboral de tiempo atrás como lo hizo en sentencia del 15 septiembre de 2004, radicación 21954, el cual ha sido reafirmado en múltiples y posteriores providencias como la SL 14078 del 7 de septiembre de 2016, rad. 45073; la SL 116 de 2018 o más recientemente la SL 2994

del 24 de julio de 2019, rad. 77729, además de que también ha sido abordado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 461 de 2020.

En esta última dijo la Corte Constitucional lo siguiente:

*“Para la época en que estuvo vigente la norma referida, [se alude al art. 47 de la Ley 100/93] los conflictos particulares en materia de seguridad social entre personas que acudían en calidad de cónyuges y de compañeras permanentes de un mismo causante, permitían identificar varias subreglas. La primera de ellas era la exigencia paritaria de la prueba sobre la convivencia con el causante durante sus últimos años de vida, para el cónyuge o el compañero permanente, sin que la forma de constitución familiar pudiera ser un obstáculo para acceder a las prestaciones de la seguridad social o, específicamente, a las pensionales.*

***La segunda era la singularidad del vínculo, pues no se concebía la idea de la simultaneidad de las relaciones de familia, bajo la normativa originaria.*** Si bien la prueba de la convivencia era exigible al cónyuge y al compañero permanente, solo aquel que acreditara una convivencia singular con el pensionado en su último periodo de vida, era acreedor de la sustitución pensional. Así las cosas, la convivencia del causante con uno de ellos, descartaba la cohabitación con el otro y, consecuentemente, la causación del derecho pensional. Por ende, el vínculo matrimonial, aunado a la convivencia entre cónyuges, descartaba la cohabitación efectiva con quien se reputara compañero permanente, de modo que más allá de la existencia de una preferencia por la persona del cónyuge sobreviviente, se concebía que la convivencia con este descartaba la posibilidad de una conformación familiar diferente y paralela, en un mismo periodo.

(...)

*“Según la versión original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la convivencia con la cónyuge o la compañera permanente descartaba la admisión jurídica de la cohabitación con la otra. La simultaneidad de las formas familiares no era una posibilidad admitida por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, la singularidad del vínculo era constitutivo del derecho a la sustitución pensional”.*

(...)

*“Dada la normativa aplicable a este caso concreto, a la expectativa que había para las reclamantes, al momento de*

*la muerte del causante, no es posible si quiera plantear la posibilidad de la distribución equitativa de la prestación, en la medida en que no era una medida prevista por el Legislador para entonces ni considerada jurisprudencialmente. Adoptar una medida semejante implicaría la aplicación de una norma que solo entraría a regir varios años después de la muerte del causante y, a partir de ella, desconocer que una de las reclamantes tenía un derecho al 100% de la prestación en los términos previstos en la versión original de la Ley 100 de 1993 y, en relación con ella, conllevaría la modificación de un derecho adquirido, en favor de una de las reclamantes que no acreditó dificultades económicas que la ubiquen en situaciones de debilidad manifiesta, sino todo lo contrario, se probó su solvencia económica actual y pasada."*

En este sentido, se infiere que la jueza de primera instancia transgredió el anterior entendimiento normativo de la época, al ordenar que la prestación se pagara en un 50% para la cónyuge, reduciendo el derecho de la compañera permanente al otro 50%.

Y al respecto cabe observar que las partes no han cuestionado el derecho de la compañera permanente MARTHA CECILIA ARDILA ÁLVAREZ a percibir la prestación, pues sus inconformidades se concentran en otros aspectos, como, por ejemplo, que el 50% reconocido a la cónyuge sea asumido no por aquella, sino por la entidad administradora de pensiones. Lo cual puede dar lugar a entender, que no desconocen que la convivencia entre el causante y la compañera permanente efectivamente ocurrió y de cuya relación nació un hijo.

Ahora, no puede olvidarse que el análisis realizado en la sentencia de primera instancia y que dio lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en un 50% a favor de la demandante, está fundado en que la interrupción de la convivencia entre los cónyuges obedeció a los malos tratos a los que fue sometida por su esposo, situación que se convertiría en eximente a la hora de demostrar el requisito de los dos años previos a la fecha de la muerte.

Al respecto la Sala observa las siguientes particularidades en el caso en cuestión:

\* En primer lugar, en ninguna parte de la demanda se menciona algún hecho relacionado con violencia intrafamiliar ejercida por el cónyuge. Lo único, es una aislada alusión a que éste “... *tuvo una vida lujuriosa y desbordada, teniendo relaciones extramatrimoniales en especial una con la señora **MARTHA ARDILA ALVAREZ...***” sin más. (Hecho 6º).

\* Al absolver interrogatorio de parte, la cónyuge, AURA ROSA MURIEL, fue preguntada de la siguiente manera:

- *¿Cómo era su relación con el Sr. JOSÉ WILLIAM NARANJO RÍOS? Bien.*
- *¿Cómo era la relación del Sr. JOSÉ WILLIAM con sus hijos? Muy bien.*

En nada menciona supuestos malos tratos, o posibles actos de violencia para con ella o con sus hijos.

\* Aún más, en la demanda se sostiene que ambos cónyuges compartieron techo y lecho desde el matrimonio celebrado el 3 de agosto de 1963 hasta el fallecimiento el 13 de enero de 1999, cuando en el mismo interrogatorio, la propia demandante dijo tajantemente que vivieron hasta 1984 “... *porque ya él se retiró, o sea, vivimos ese tiempo y él en el 84 se fue*”.

\* A la presunta violencia intrafamiliar, se refirió solo la testigo CELINA DEL SOCORRO GIRALDO SANDOVAL, quien afirmó que la relación no se acabó del todo, pero que “... *él fue muy mal esposo, tremendamente maltratador; por un tiempo estuvieron distantes por el miedo de que él la fuera a matar y llegó el momento en que ya no vivieron más bajo techo*”. Manifiesta luego que la relación terminó: “*Por violento que era*

*el señor, demasiado violento que era, la golpeaba en embarazo y de todo hacía, mujeriego fue mucho, fue tremendamente mujeriego."*

Sin embargo, la testigo no da la razón de la ciencia del dicho, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los conoció, esto es, no indica, ni la jueza ni los apoderados inquirieron por ello, la fuente de su conocimiento, vale decir, si conoció de tales hechos por haber estado presente, o si fue por comentarios de la cónyuge o de terceras personas, etc., cuestión que resulta de vital importancia a la hora de valorar la prueba testimonial.

La Corte Constitucional en la sentencia SU-129 de 2021 al respecto significó:

*"Finalmente, respecto de la forma en que debe valorarse la prueba testimonial, los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal del Trabajo establecen dos reglas en particular. (i) Siendo necesario procurar un mínimo de objetividad en el testimonio, la ley impone al juez el deber de interrogar a la persona sobre "la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento [...]". La respuesta que se dé a esa pregunta también habrá de estudiarse. Por último, (ii) el Código Procesal del Trabajo resalta que, recabados todos los medios de prueba (incluidos los testimonios), el juez debe analizarlos en conjunto y definir si con ellos es posible llegar al convencimiento de los hechos ocurridos. Todo esto "inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes".*

\* Por su parte la restante testigo, MARÍA LICINIA MORA HINCAPIÉ, no informó nada al respecto, ni espontáneamente como lo hizo la anterior testigo, ni por requerimiento de la jueza o de los apoderados. Esto además de que tal declarante señaló que hace 20 años se fue del país, que ha vivido en Estados Unidos y en Cartago, y, sin embargo,

adujo en su versión que su amiga AURA ROSA convivió con el causante hasta la fecha de la muerte, contra evidenciando la prueba ya relatada.

En suma, a juicio de la Sala, no están debida y suficientemente demostrados los malos tratos a que se refirió la testigo citada, ni mucho menos que la separación de la pareja se hubiera debido a esos supuesto hechos.

En esas condiciones, no resulta posible eximir a la señora AURA ROSA de acreditar el requisito de la convivencia en los 2 años anteriores a la fecha de la muerte por efectos de una separación por malos tratos cuando tal situación no está debidamente acreditada, sumado al hecho de que lo ocurrido data de 15 años antes del momento en que se produjo la muerte del causante, y que éste hizo vida marital con la Sra. MARTHA ARDILA ÁLVAREZ, con quien tuvo un hijo, WILLIAM JOSÉ, nacido el 12 de octubre de 1989.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá ser revocada y en su lugar se absolverá a la ACP COLPENSIONES y a la señora MARTHA CECILIA ARDILA ÁLVAREZ de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante.

Sin costas en esta instancia. En primera instancia estarán a cargo de la demandante.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**REVOCAR** la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de enero de 2022. En su lugar,

**ABSUELVE** a la ACP COLPENSIONES y a la señora MARTHA CECILIA ARDILA ÁLVAREZ de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante.

Sin costas en esta instancia. En primera instancia estarán a cargo de la demandante.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d34daab113b562bf3984f6a7adf669ed143fa60546a8c33370f6a103ff2c0aaf**

Documento generado en 27/10/2022 01:44:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>